

# LA DINÁMICA SOCIAL DE LA VIOLENCIA

*Manuel Guerrero Antequera*

## MANUEL GUERRERO ANTEQUERA

Doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y eticista. Cuenta con estudios de posdoctorado en neuroética y filosofía del cerebro en la Universidad de Uppsala, Suecia. Académico del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del comité académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la misma universidad. Recientemente, publicó su libro *Sociología de la Masacre. La producción social de la violencia*, publicado por el sello Paidós.

## LA DINÁMICA SOCIAL DE LA VIOLENCIA

El modo en que se expresa la violencia sobre civiles en contextos de conflicto agudo tiene amplia variedad. Los reportes descriptivos que realizan las Comisiones de Verdad a partir de los testimonios recogidos así lo evidencian. En el caso de Chile, el *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, de 1991, y el *Informe sobre la Calificación de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y de la Violencia Política*, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de 1996, entregaron en su conjunto el registro de 3197 casos de víctimas calificadas por el Estado de Chile como muertos (2095) y desaparecidos (1102) en el período que va del 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990. Las formas de implementación de la violencia homicida variaron desde la muerte por heridas de balas que se disparaban en las calles en forma indiscriminada durante los toques de queda, principalmente durante los primeros cuatro meses de la dictadura militar —en los que se concentran más de la mitad de todos los muertos de los 17 años de dictadura—, a ejecuciones por Consejos de Guerra; muertes por tortura; uso de químicos; quema de personas vivas en la vía pública y degollamientos.

Por su parte, el *Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura*, publicado en febrero de 2005, calificó a 27 255 personas como víctimas de un total de 33 221 detenciones ocurridas durante el mismo período que abordaron los otros informes. De las víctimas, 27 153 son mayores de 18 años y 102 menores de edad al momento de su detención, prisión política y tortura. La mayoría de las personas consideradas en estos informes cabe dentro del concepto de población civil, incluyendo a quienes —que constituyen un número reducido de los casos registrados por las respectivas comisiones— participaron en enfrentamientos, pues al momento de su ejecución estaban desarmados o fuera de combate. Para el caso chileno, los informes demuestran que no hubo guerra, sino masacre.

Recorrer las formas que adoptó la violencia contra la población civil, que no estaba participando en combates convencionales al momento en que les fue infringida —la mayor parte ocurrió cuando las personas estaban detenidas o se habían entregado voluntariamente— resulta apabullante; y exponerse a los relatos de las personas sobrevivientes, aterrador. La atrocidad, la violencia excesiva, la crueldad y la desnuda brutalidad son expresivas de la barbarie característica del uso de la violencia en los terrorismos de Estado, genocidios

y exterminios. Son variadas las teorías que han intentado explicar las causas de estos usos aniquiladores de la violencia que, en buena parte, consiste en la victimización de los no combatientes directos. Con todo, es posible observar que para poder hacerse efectiva la violencia extrema por parte de los agentes del Estado se utilizaron técnicas de desconexión moral hacia las víctimas, que implicaron procesos de expulsión de la comunidad moral de iguales. Los mecanismos de deshumanización del otro se hicieron habituales, lo que en parte explica el uso de distintas formas de violencia en una magnitud e intensidad que, en un contexto de paz, resultarían difíciles de imaginar, ya que los períodos de fuerte regulación llevan a que los conflictos no estallen en el uso de la violencia física intencionada y aniquilatoria, sino que se resuelvan de otros modos.

Pero, si bien la tesis de deshumanización del otro —de la alteridad negativa— es válida, al revisar los Informes Rettig y Valech llama la atención que una parte importante de los usos de la violencia tuvieron un carácter íntimo, es decir, no deshumanizado, sino por el contrario: quienes desde la población se valieron de la violencia en forma indirecta —por ejemplo, mediante el proceso de delación y denuncias— por lo general conocían a sus víctimas; y es porque las conocían que convirtieron su deseo de generar daño —antes reprimido— en una posibilidad que la nueva situación de terrorismo de Estado hizo plausible. La violencia de tipo fratricida no es impersonal sino íntima. De ahí que, para quienes la vivieron y para los observadores, resulte aún más aterradora.

Si consideramos, de acuerdo con lo planteado por Norbert Elias, que los procesos de racionalización que llevan a la constitución y evolución de los estados modernos implican una tendencia a lo que Max Weber llamaba el monopolio legítimo de la coacción física, debemos tener en cuenta que los contextos en los cuales ocurren las violencias antes enumeradas —y que normalmente calificamos de bárbaras— implican un colapso de los controles y autocontroles sociales del período «normal». Estos ya no operan del mismo modo, por lo que cometer actos antes considerados atroces pasa a ser no solo posible, sino incluso premiado para ascender en jerarquía o ganar estatus en el nuevo contexto marcado por la violencia.

«Sin Dios ni ley» es un ambiente que se puede describir como anómico, del que puede aflorar una cultura del embrutecimiento, que gatilla una espiral de venganzas y violencias grupales de distinto tipo. Exponerse de modo constante a la violencia en un marco de ausencia de controles sociales puede generar su naturalización; cambiando el umbral de lo tolerable; reduciendo el coste de la actividad violenta, pues al no correr los mismos castigos de antes lo aceptable se expande; permitiendo «hacer carrera» a quienes tienen mayor inclinación para cometer actos violentos; desaprendiendo las competencias sociales de

solución pacífica de conflictos y aprendiendo otras modalidades de acción social basadas en la violencia física. En definitiva, los mecanismos psicosociales de autosanción y autocontención de otros períodos dejan de correr; en su lugar, la violencia crea su orden social, con premios y castigos propios al nuevo período que se abre.

De forma inquietante, más allá de las figuras del «perpetrador» y las «víctimas directas», los civiles no combatientes no solo aparecen en el lugar de víctimas de la violencia que otros perpetraron, sino que muchos de ellos se hicieron parte de ella. La dinámica de la colaboración de los civiles no combatientes operó en forma extendida durante muchos años de la dictadura: esta faz íntima fue aprovechada por actores como la DINA o la CNI, quienes —para ejercer su control— requirieron de información cualificada para acertar en sus blancos —individuales o colectivos—, y así poder pasar de la violencia indiscriminada y masiva de los primeros meses del golpe a una selectiva, más característica de los años siguientes.

La fuerza y velocidad transformadora de la dinámica de la violencia es una de las causas que desconcierta no solo a observadores sino a los propios protagonistas de los conflictos. El contexto sociopolítico y de larga duración previo al golpe, sin duda, puede entregar elementos de análisis para la comprensión de las actuaciones de los distintos individuos. Pero se deben considerar e incorporar los efectos de la violencia una vez ocurrido el golpe en el análisis, aspecto poco estudiado para el caso chileno. La mayoría de la población en situaciones de conflicto agudo, atravesado por la violencia, tiene una conducta compleja, ambigua y cambiante, distinta a la de una minoría fuerte que se mantiene en el compromiso a toda prueba.

El terreno político del conflicto, agudizado por el uso de la violencia como recurso, cambia y genera sus propios efectos de realidad. Por eso se le utiliza por parte de actores estratégicos, no solo para eliminar al otro, sino para generar control y adhesión. A este respecto, René Girard afirma que por el uso de la violencia en un contexto de polarización endógena —polarización no previa sino producida una vez que se ha empleado la violencia—, al agudizarse la rivalidad entre los actores, estos pueden incluso tender a olvidar el origen del conflicto y las causas de la rivalidad inicial. Así, va generándose una suerte de purificación de la disputa que expulsa las razones externas a su propio fluir, generando una fascinación mutua entre los rivales sujetos a la producción de la violencia, que se ponen en juego dentro del nuevo contexto creado por sus propias acciones. La violencia, en este sentido, tiene un carácter fundacional.

Mirar la dinámica de la violencia, una vez esta se desata, nos lleva a poner atención no solo al papel que cumplieron «perpetradores» y «víctimas», sino

al rol que nos cupo a la población en general en la producción conjunta de ella. A 50 años del golpe, este es un aspecto a considerar en los análisis pues la pregunta que se abre es respecto del rol que estamos dispuestos a jugar hoy ante nuevos escenarios cruzados por la violencia: ¿seremos testigos pasivos de ella, o nos plegaremos a su producción o, como fue el caso del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad, tomaremos un rol activo para registrarla, modularla, detenerla y acaso evitarla?

La pregunta es reflexiva: en su respuesta nos reflejamos a nosotros mismos y lo que queremos llegar a ser. Es el papel de la memoria social del golpe: se trata de ponerlo en común, estudiarlo, analizarlo y pensarlo para intervenir en nuestro presente, de modo que el *Nunca Más* no sea solo una consigna, sino un modo de ser de la sociedad toda, de la que cada uno de nosotros y nosotras es también diariamente responsable.